

[Inicio](#) > [Atención al ciudadano](#) > [Canales de atención](#)

> [Formulario para solicitudes, peticiones, quejas, reclamos o denuncias](#)

Formulario para solicitudes, peticiones, quejas, reclamos o denuncias

El número de radicado de su solicitud es:

202041730100408112

Con este número de radicado, haga clic aquí para consultar el estado de su solicitud.

Aquí puede realizar la encuesta de satisfacción

Realice su denuncia sobre
corrupción

Radicación de trámites

Solicitud con identidad
reservada.

Presentese a la Oficina cuando necesite:

- Información general: trámites, plazos, documentos; direcciones y teléfonos.
- Solicitud de información sobre licencias, certificados y permisos.
- Información de las ofertas de empleo público.
- Orientación en procesos de vivienda, pago de impuestos y ofertas escolares.

Número de visitas a esta página 720536
Fecha de publicación 11/05/2004
Última modificación 26/12/2019

Canal Virtual

Comuníquese desde su computador para radicar mensajes a través del sistema Ofes y además recibir orientación desde el chat asistido.



Canal Telefónico

Comuníquese vía telefónica a la línea 195 para radicar su petición, queja o reclamo. Haz clic para más información.



Canal Presencial

Acércuese a la Alcaldía a radicar sus peticiones, quejas y reclamos. Haz clic para más información.



100.21.1

Doctor

JORGE IVÁN OSPINA

Alcalde Municipal de Santiago de Cali

CAM -Torre Alcaldía - Piso 3

Ciudad

ASUNTO: Solicitud de modificación del artículo 2º del Decreto Municipal No. 4112.010.20.0767 del 2 de abril del 2020.

Cordial saludo.

El Decreto Municipal No. 4112.010.20.0767 del 2 de abril del 2020 "*Por el cual se imparten órdenes e instrucciones necesarias para la debida ejecución de la medida de aislamiento obligatorio ordenada mediante el Decreto Nacional 457 del 22 de marzo de 2020 y el Decreto Distrital No. 4112.010.20.0742 de marzo 24 de 2020 y se dictan otras disposiciones*", estableció como restricción a la ciudadanía para hacer algunas diligencias, el último dígito de la cédula.

Lastimosamente en el artículo segundo, se limita el acceso a los servicios bancarios, financieros y de operadores de pago, dependiendo del último dígito de la cédula, sin tener en cuenta que hay días en que no se prestan dicho servicio.

De acuerdo con el cuadro de la norma citada en el asunto de este oficio indica:

DÍA	DOCUMENTO DE IDENTIDAD
Lunes	1, 2, 3
Martes	4, 5, 6
Miércoles	7, 8, 9
Jueves	0, 1, 2
Viernes	3, 4, 5
Sábado	6, 7, 8
Domingo	0, 9

Según este decreto, los dígitos terminados 1, 2, 3, 4 y 5 pueden ir dos veces a la semana al banco. Mientras los dígitos 6, 7, 8, 9 y 0 sólo se les permite una vez y se les fija que pueden utilizarlos, sábado y domingos, cuando en muchas ocasiones no hay servicios bancarios o financieros y de operadores de pago o estos solo tienen atención hasta pasado el mediodía del sábado.

Así las cosas, se considera que esta situación puede vulnerar el derecho fundamental de igualdad de muchos ciudadanos que han manifestado su inconformidad con ello.

Para la Personería Distrital de Santiago de Cali es consciente que, cualquier medida o decisión que adopte la Alcaldía en restricción de la movilidad es por el bienestar de la ciudadanía y es insuficiente para la protección de esta, no es menos cierto que, dicha diferenciación no soporta un test de igualdad en los términos de la Constitución Política y un juicio de igualdad.

Al respecto la Honorable Corte Constitucional, ha precisado:

“El juicio integrado de igualdad tiene tres etapas de análisis:

- (i) establecer el criterio de comparación: patrón de igualdad o tertium comparationis, valga decir, precisar si los supuestos de hecho son susceptibles de compararse y si se compara sujetos de la misma naturaleza;*
- (ii) definir si en el plano fáctico y en el plano jurídico existe un trato desigual entre iguales o igual entre desiguales; y*
- (iii) averiguar si la diferencia de trato está constitucionalmente justificada, es decir, si las situaciones objeto de la comparación ameritan un trato diferente desde la Constitución.*

El test de igualdad, que se aplica en el juicio integrado de igualdad, en su metodología busca analizar tres objetos: (i) el fin buscado por la medida, (ii) el medio empleado y (iii) la relación entre el medio y el fin. Según su grado de intensidad, este test puede tener tres grados: estricto, intermedio y leve. Para determinar cual es el grado de intensidad adecuado a un caso sub judice, este tribunal ha fijado una regla y varios criterios, como se da cuenta enseguida. La regla es la de que al ejercer el control de constitucionalidad se debe aplicar un test leve, que es el ordinario. Este test se limita a establecer la legitimidad del fin y del medio, debiendo ser este último adecuado para lograr el primero, valga decir, a verificar si dichos fin y medio no están constitucionalmente prohibidos y si el segundo es idóneo o adecuado para conseguir el primero. Esta regla se formula a partir de dos importantes consideraciones: el principio democrático, en el que se funda el ejercicio de las competencias del legislador, y la “presunción de constitucionalidad que existe sobre las decisiones legislativas”. El test leve busca evitar decisiones arbitrarias y caprichosas del legislador, es decir, decisiones que no tengan un mínimo de racionalidad. El test leve ha sido aplicado por este tribunal en casos en que se estudian materias económicas, tributarias o de política internacional, o en aquellos en que está de por medio una competencia específica definida por la Constitución en cabeza de un órgano constitucional, o en los cuales se trata de analizar una normatividad anterior a la vigencia de la Carta de 1991 derogada pero que surte efectos en el presente, o cuando, a partir del contexto normativo del precepto demandado, no se aprecie prima facie una amenaza para el derecho en cuestión. Para aplicar un test estricto, que es la primera y más significativa excepción a la regla, este tribunal ha considerado que es menester que esté de por medio una clasificación sospechosa, como las previstas de manera no taxativa a modo de prohibiciones de discriminación en el artículo 13 de la Constitución; o que la medida recaiga en personas que estén en condiciones de debilidad manifiesta, o que pertenezcan a grupos marginados o discriminados o a sectores sin acceso efectivo a la toma de decisiones o a minorías insulares y discretas; o que la diferenciación afecte de manera grave, prima facie, el goce de un derecho constitucional fundamental; o que se constituya un privilegio. El test estricto es el más exigente, pues busca establecer que

si el fin es legítimo, importante e imperioso y si el medio es legítimo, adecuado y necesario, es decir, si no puede ser remplazado por otro menos lesivo. Este test incluye un cuarto objeto de análisis: si los beneficios de adoptar la medida exceden claramente las restricciones impuestas sobre otros principios y valores constitucionales. Entre los extremos del test leve y del test estricto está el test intermedio, que se aplica por este tribunal cuando se puede afectar el goce de un derecho no fundamental o cuando hay un indicio de arbitrariedad que puede afectar la libre competencia. Este test busca establecer que el fin sea legítimo e importante, sea porque promueve intereses públicos valorados por la Constitución o por la magnitud del problema que el legislador busca resolver, y que el medio sea adecuado y efectivamente conducente para alcanzar dicho fin¹.”

Bajo las anteriores premisas, esta agencia del Ministerio Público con todo respeto le solicita estudiar la posibilidad de modificar el citado artículo segundo del Decreto No. 4112.010.20.0767 del 2 de abril del 2020, teniendo como fundamento el derecho fundamental de la igualdad en la atención en los servicios bancarios, financieros y de operadores de pago.

Atentamente,


HAROLD ANDRÉS CORTÉS LAVERDE
Personero Distrital de Santiago de Cali

Copia: Carlos Alberto Rojas
Secretario de Seguridad y Justicia

Proyectó: Juan Pablo Restrepo C. – Asesor Contratista despacho.
Revisó: Edison Julián Urrea – Jefe de la Oficina Asesora Jurídico.
Revisó: Juan Carlos Rojas Correa – Personero Auxiliar.

¹ Sentencia C-015 del 2014.